

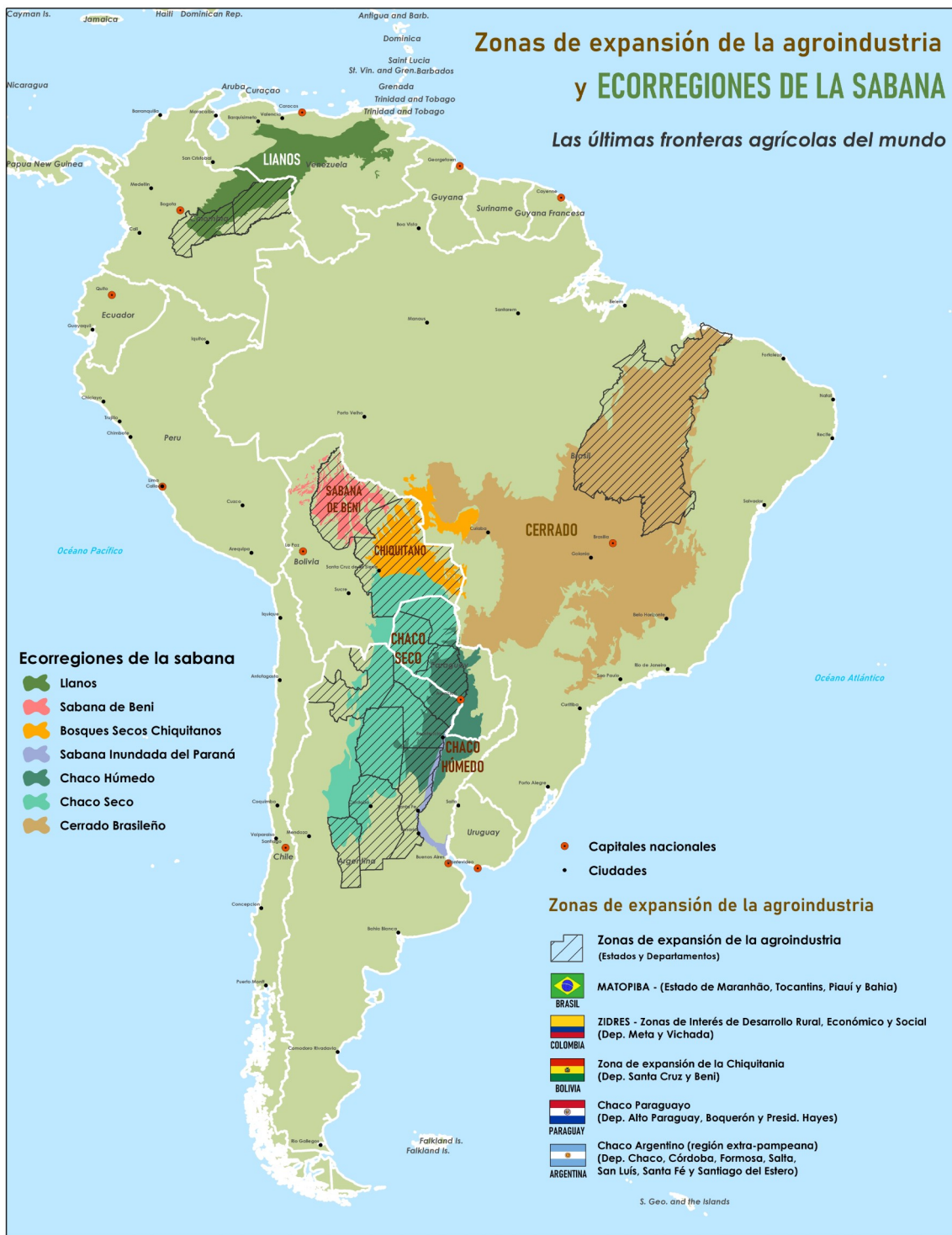


## Zonas de expansión e inversión de la agroindustria en América del Sur



**GRAIN | Septiembre 2020**

Describimos abajo el proceso de digitalización, titulación y financierización de las tierras en las cinco *zonas de expansión e inversión de la agroindustria* identificadas para América del Sur: la Orinoquía o Llanos Orientales en Colombia; el Matopiba en el Cerrado brasileño, y las regiones a lo largo de la ruta del flujo de salida de producción de la Hidrovía Paraná-Paraguay: los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y Beni en los bosques secos chiquitanos en Bolivia, el Chaco Seco Paraguayo y el Chaco Argentino.



## BRASIL-Matopiba

Brasil es uno de los principales países bajo presión para la expansión de la frontera agrícola en el mundo, especialmente en la última década (Agrostat, 2020).<sup>1 2</sup> De los 236 millones de hectáreas de área agropecuaria (de cultivo y ganadería) en el país, 193 millones de hectáreas fueron destinadas a la ganadería y 35 millones de hectáreas a la soja (34 millones de hectáreas de soja transgénica) en 2019, ejerciendo presión sobre todo en las tierras y los pueblos de la región de la Amazonia Legal, el Cerrado (con sus más de 300 pueblos distintos entre los pueblos tradicionales del campo y los bosques) y sus zonas de transición.<sup>3 4 5 6</sup>

Entre 2006 y 2017, 16.5 millones de hectáreas fueron convertidas por la actividad agropecuaria, siendo sólo la soja la responsable de la expansión de la frontera agrícola en 12 millones de hectáreas en los últimos diez años (FAOSTAT, 2018). Tal expansión se reflejó en el aumento de la concentración de tierras en el país, donde 1% de las propiedades rurales ocupan el 47.6% del campo brasileño (Censo Agropecuario, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística- IBGE/2017)<sup>7</sup>

- 1 Entre 1961 y 2015 Brasil incorporó 133 millones de hectáreas para uso agropecuario, mientras que disminuyó su cobertura forestal del 76% al 58.9%, siendo el país que más deforestó en el mundo. GRAIN. *Brasil: Pacto contra a biodiversidade e os territórios dos povos*. 2019. Disponible en: <https://grain.org/e/6278>
- 2 En 2013, China se convirtió en el mayor socio comercial de Brasil, superando a la UE, pasando del 7% en 2005 al 32% de las exportaciones totales en el sector en 2019. Ver: <http://indicadores.agricultura.gov.br/agrostat/index.htm>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.
- 3 Brasil es responsable de 20% de las exportaciones mundiales de carne de res, siendo el mayor productor del mundo, con 213 millones 700 mil cabezas. Ver: <http://abiec.com.br/publicacoes/beef-report-2020/> y <http://abiec.com.br/exportacoes/>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.
- 4 Brasil representa hoy 80% de las exportaciones de soja en todo el mundo, equivalente a 77 millones de toneladas, convirtiéndose también en el mayor productor en 2020, con 126 millones de toneladas. Ver: <https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/soja/soja-preco-producao-exportacao-2020/>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.
- 5 Brasil sigue siendo el segundo más grande en área plantada con transgénicos, con 51 millones 300 mil hectáreas. Además de la soja, el maíz modificado genéticamente ocupa 15 millones 380 mil hectáreas; el algodón modificado genéticamente, 1 millón de hectáreas; y la caña de azúcar, 400 mil hectáreas plantadas por primera vez en Brasil. Disponible en: <http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/54/executivesummary/default.asp>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.
- 6 Sabana tropical más biodiversa del mundo y la caja de agua de la que nacen las tres cuencas hidrográficas más grandes de América del Sur, el Cerrado brasileño está constituido en territorios de gestión colectiva de más de 300 pueblos y comunidades tradicionales diferentes, como las kraô kanela, las gamela, las guaraní kaiowá, las xavantes, las terena, las xacriabas, las comunidades apinajé, así como las comunidades quilombolas, las que aprovechan el reflujo o vaciante, las isleñas, geraizeras (que viven en los llamados “Gerais”, región de “cerrados” en el norte del estado de Minas Gerais), las comunidades que comparten un área sin cercamientos, las que trabajan el coco *babaçu*, entre innumerables otras.
- 7 *Censo Agro 2017: população ocupada nos estabelecimentos agropecuários cai 8.8%*. Outubro de 2019. Ver: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25789-censo-agro-2017-populacao-ocupada-nos-estabelecimentos-agropecuarios-cai-8-8>. Consultado el 20 de agosto de 2020





***La valla de agua para el riego de las grandes explotaciones agrícolas en Petrolonia, PE, se hace por medio de seguridad privada y de drones, para evitar que los residentes tengan acceso al agua. Crédito de la foto : Portal de Internet del Estado de S. Paulo***

Hoy, en Brasil, el Cerrado es considerado la principal zona de expansión e inversión en las cadenas globales de valor de la agroindustria, y representa cerca del 45% del área agropecuaria nacional, produciendo 52% de la soja del país.<sup>8</sup> En consecuencia, aparecen por primera vez áreas con más de 1 millón de hectáreas de soja cosechada, como en Alto Teles Pires y Parecis, en el estado de Mato Grosso, y Barreiras, en Bahía y el suroeste de Goiás.<sup>9</sup> Por esta razón, un 50% de los cerrados han sido deforestados en los últimos cuarenta años con la pérdida de un 31% de su población rural: cerca de 3.6 millones de personas han sido expulsadas del campo para ocupar las periferias urbanas.<sup>10</sup> Y el proceso de expulsión del campo sigue en la región: de las 10 mil 362 familias desalojadas debido a conflictos por la tierra en 2019, el 61% se encontraban en los estados que componen el Cerrado, siendo 1 061 desalojos en el Matopiba.<sup>11</sup>

8 En 1975, el Cerrado representó 9% (540 mil hectáreas) de la soja plantada en el país; 20% del área cosechada con maíz; 22% del área de algodón y 25% del área de caña de azúcar. En 2015, saltó al 52% (o 17 millones 400 mil hectáreas) del área nacional con producción de soja, 49% de la producción de maíz (7 millones de hectáreas) 98% de la producción de algodón y 49% del área con caña de azúcar, con 5 millones de hectáreas. Ver Embrapa, INPE e IPEA. “Dinâmica Agrícola no Cerrado. Análises e projeções 2020”, p. 42 y p. 44-45. Ver: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/212381/1/LV-DINAMICA-AGRICOLA-CERRADO-2020.pdf>

9 *Ibid.* p. 40-41 y 43. Ver el mapa de los estados (provincias) con mayor concentración de tierra en: <https://www.beefpoint.com.br/desigualdade-da-distribuicao-de-terras-no-pais-e-uma-das-mais-altas-do-mundo/>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

10 Lemto-Uff en Carlos Walter Porto-Gonçalves. “Dos Cerrados e de suas riquezas: de saberes vernaculares e de conhecimento científico”. CPT y FASE, 2019, p. 26.: [https://fase.org.br/wp-content/uploads/2019/12/PUBLICACAO\\_CERRADO-2.pdf](https://fase.org.br/wp-content/uploads/2019/12/PUBLICACAO_CERRADO-2.pdf).

11 De los 32 asesinatos, 9 ocurrieron en las principales zonas de expansión de la agroindustria en el Cerrado (Bahía, Maranhão, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul), y 12 en el estado (provincia) de Pará, por donde transitan los principales corredores logísticos para la exportación de soja, carne y minerales en el país hacia los puertos de Barcarena y Santarém. *Comissão Pastoral da Terra- CPT. Cadernos Conflitos do Campo*. 2020. Ver: <https://cptnacional.org.br/downloads-2/category/41-conflitos-no-campo-brasil->

A principios de la década del 2000, la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO) identificó el Cerrado como la más importante zona de expansión agrícola mundial en este siglo.<sup>12</sup> En la década siguiente, el Matopiba pasó a ser definido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como “la frontera agrícola más reciente en Brasil” (USDA, 2012), con una gran parte de sus tierras e infraestructura logística organizada por conglomerados agroindustriales extranjeros, como el ABCD del agro y la empresa china Cofco Agri, hasta actores exógenos al sector, como fondos de inversión extranjeros, a ejemplo de la *Teachers Insurance and Annuity Association of America* (TIAA) y Harvard Endowment (GRAIN, 2020), Brookfield Asset Management, Cresud Mitsui, Mitsubishi, Valiance Capital, Private Equity Pátria Investimentos/Blackstone, entre otros (CHAIN REACTION RESEARCH, 2018)<sup>13 14 15 16 17 18 19 20</sup>.

El Matopiba nace como una zona de expansión alternativa a Mato Grosso, sobre todo debido al bajo precio de las tierras, la mayor proximidad a los puertos para la exportación de soja, así como el relieve llano de sus mesetas, con la fácil inserción de la mecanización intensiva y la abundancia de agua, lo que lleva el Cerrado a tener hoy el 78% del total de pivotes centrales de Brasil, casi 90% en el oeste del estado (provincia) de Bahía.<sup>21 22 23</sup>

#### publicacao

- 12 Landers, 2001, p. 39 en Diana Aguiar, *As veias abertas para a expansão do capital: tensões territoriais no projeto de transformação do Tapajós em corredor logístico*. UFRJ, 2019, p. 84.
- 13 Acrónimo que hace referencia a una región de 73.173.485 hectáreas que ocupa partes de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, en el Noreste de Brasil.
- 14 ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus.
- 15 Cofco Agri es uno de los brazos de la empresa estatal china Cofco International, productora y comercializadora en las cadenas globales de suministro de granos, semillas oleaginosas, café y azúcar. El conglomerado compró el 100% del capital de Noble Agri y controla las plantas, silos y almacenes de Nidera en las inversiones de América del Sur. Ver: <https://www.cofcointernational.com/>
- 16 “Grilagem de terras de Harvard no Brasil é desastre para comunidades e alerta para especuladores”. 2020. Ver: <https://grain.org/e/6458>
- 17 Brookfield Asset Management es un fondo de inversión canadiense presente en Brasil desde hace cerca de 120 años y tiene en el país su primera plaza de inversiones.
- 18 Mitsui es uno de los conglomerados más importantes de Japón. Opera en la cadena agroalimentaria y en los servicios financieros. En Brasil, invierte en tierras en una *empresa conjunta* con la SLC Land Co. en dos fincas de São Desidério (Bahía) y Porto dos Gaúchos (Mato Grosso). También controla la Agrícola Xingu, que posee tierras en São Desidério (Bahía).
- 19 Mitsubishi Corporation está representada en el país por su subsidiaria Agrex do Brasil. Actúan como productores, proveedores de insumos agrícolas y propietarios de tierras en Maranhão, Tocantins y Piauí, con cerca de 28 mil hectáreas. Ver: <http://www.agrex.com.br/nossos-negocios/producao-agricola>
- 20 Según el informe de la CCR, estos fondos financieros controlaban 868 mil 488 hectáreas de tierras en la región del MATOPIBA. Aunque se sabe que estas cifras están subestimadas.
- 21 Agência Nacional de Águas (ANA). “Levantamento da agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil (1985-2017)”. 2019, p. 19. Ver: <https://www.ana.gov.br/noticias/ana-e-embrapa-identificam-forte-tendencia-de-crescimento-da-agricultura-irrigada-por-pivos-centrais-no-brasil/ana-levantamento-da-agricultura-irrigada-por-pivos-centrais-2019.pdf>.
- 22 Ver: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1002769/caracterizacao-ambiental-das-areas-com-agricultura-irrigada-por-pivos-centrais-na-regiao-do-matopiba---brasil>
- 23 En los últimos cinco años, se han abierto 63 mil denuncias policiales en comisarías de todo el país debido a conflictos por agua. Durante 2019, la CPT registró 489 conflictos por el agua, con la participación de 69 mil 793 familias, un aumento del 77% respecto a 2018. Ver *Caderno Conflitos no campo de 2019*. Comissão Pastoral da Terra (CPT), abril de 2020. Hay desde pozos custodiados por el Ejército hasta lagos bajo vigilancia de escolta armada y canales rodeados por muros. Ver: <http://www.correiopovo-al.->

El gobierno brasileño no tardó en sentar las bases para la implementación del proyecto Matopiba como zona de expansión e inversión prioritaria del agronegocio sobre los territorios del Cerrado. A través del Decreto 8.447/2015, el Plan de Desarrollo Agropecuario del Matopiba (PDA-Matopiba) pasa a crear políticas de financiamiento en las cerca de 73 millones de hectáreas entre los estados (provincias) de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía con el fin de ampliar la infraestructura logística y aplicar la innovación tecnológica para expandir la frontera agrícola.



***La Comunidad de Cajueiro (MA) en Brasil, que lucha por su derecho a existir, ve sus casas destruidas para la construcción del puerto privado de la región por la empresa constructora WTorre en asociación con la Corporación Estatal China CCC -Compañía de Construcción de Comunicaciones. Foto: Vias de Fato@Mediá Ninja***

Se han realizado importantes proyectos en la región, con la pavimentación y construcción de carreteras y ferrocarriles en los últimos cuarenta años. Sin embargo, es en la década del 2000 que se observa una mayor inversión de capital extranjero en la red logística y de infraestructura, ya que solo en el Matopiba el área sojera pasó de 1 millón a 3 millones 400 mil hectáreas entre 2000 y 2014, alcanzando los actuales 7 millones 800 mil hectáreas (cosecha 2019/2020), lo que, en producción, significó un aumento de 4.028% [cuatro punto veintiocho o ¿4 mil 28 por ciento?] en 25 años<sup>24</sup>.

Los principales modales de infraestructura y logística (carreteras y ferrocarriles) que atraviesan el Matopiba buscan integrar la región con los principales puertos, especialmente de las regiones amazónicas, los cuales se consideran como algunos de los complejos portuarios más importantes para la exportación de soja en el país.<sup>25 26</sup> Aunque fuera de la zona del Matopiba, la carretera BR 163, que conecta Sinop (Mato Grosso) con el Puerto de Miritituba, en Itaituba (Provincia

[com.br/index.php/noticia/2020/02/02/pais-tem-63-mil-ocorrencias-policiais-por-disputa-de-agua](http://com.br/index.php/noticia/2020/02/02/pais-tem-63-mil-ocorrencias-policiais-por-disputa-de-agua). Consultado el 11 de septiembre de 2020.

24 Disponible en: [https://www.inputbrasil.org/wp-content/uploads/2016/11/A-Expans%C3%A3o-da-Soja-no-Cerrado\\_Agroicone\\_INPUT.pdf](https://www.inputbrasil.org/wp-content/uploads/2016/11/A-Expans%C3%A3o-da-Soja-no-Cerrado_Agroicone_INPUT.pdf). Consultado el 11 de septiembre de 2020.



de Pará), es una de las principales rutas de la soja y la deforestación en el Cerrado y Amazonia, que cuenta con terminales propiedad de distintos actores extranjeros, como Bunge y Cofco Agri.<sup>27</sup> El puerto de Miritituba contó con la financiación del fondo de Private Equity Pátria Investimentos, controlado por el fondo global estadounidense Blackstone, hoy administrado por ellos, que también tiene la concesión para la ampliación de la BR 163.<sup>28</sup> [Las citas siempre afuera del punto, la coma o el paréntesis...]

El Ferrocarril Norte-Sur es también una de las principales vías de conexión con carreteras del centro de Brasil para transportar la producción de soja a la región del Matopiba, conectando la unidad de Açailândia, en Pará, con Estrela d'Oeste, en São Paulo. Algunos tramos del ferrocarril fueron cedidos a Rumo Logística S.A., principal brazo logístico de Cosan, socia de la empresa inmobiliaria rural Radar Propriedades S.A., con uno de los mayores fondos de inversión/pensión con aplicación en tierras en Brasil, el TIAA, especialmente en el Matopiba.

**Digitalización de tierras por catastro ambiental como base para la regularización de tierras.** La exigencia de abrir cada vez más tierras para la producción de mercancías agrícolas de exportación y para el mercado de tierras viene generando una fuerte disputa en pro de la privatización de tierras públicas, devolutas (“baldías” o “vacantes”) y de pueblos y comunidades tradicionales, aumentando los conflictos en el campo.<sup>29</sup> De las 851 millones de hectáreas del país, el 53.1% están ocupadas por tierras públicas, baldías o aún por tierras privadas con limitaciones al ejercicio de la propiedad, como los territorios quilombolas, que cuentan con la prohibición de su

---

25 Como señalan los datos de la Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios (ANTAQ), entre los 10 puertos más importantes (en volumen) para las exportaciones de soja, cinco están ubicados en la Amazonia, a saber: Barcarena (Pará), Itaqui (Maranhão), Itacoatiara (Amazonas), Santarém (Pará) y Porto Velho (Rondônia). Disponible en: <https://www.cartadebelem.org.br/noticias/>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

26 Como las carreteras BR 158 y BR 153, que conectan el centro-oeste y sur del país con el puerto de Itaqui (Maranhão). Esta dinámica logística en los puertos de la Amazonia también favorece el aumento del monocultivo de soja en los territorios por donde pasan carreteras y vías férreas y en los puertos. El territorio tradicional de Cajueiro, en Maranhão, donde conviven más de 600 familias agroextractivas hace unos 200 años, se está transformando en una verdadera zona de sacrificio de estos pueblos por el avance de estructuras logísticas e instalación de grandes emprendimientos en la cadena minera y agroindustrial. La situación se agravó a partir de 2014 con la implementación de un nuevo puerto privado en la región por parte de la Constructora WTorre, en alianza con la corporación China Communications Construction Company (CCCC), estatal china con capital abierto y de carácter multinacional, destinada a la exportación de mercancías agrícolas como maíz, soja, fertilizantes y derivados del petróleo. Ver “Campanha Nacional em Defesa do Cerrado”. Ver: <https://semcerrado.org.br/campanha/>

27 El puerto administrado por Hidrovias do Brasil, que pertenece a Pátria Investimentos y Blackstone, cuenta con inversiones de Temasek, fondo de inversión canadiense, e International Finance Corporation, brazo de inversiones del Banco Mundial.

28 Pátria Investimentos posee tierras en los estados (provincias) de Bahía, Tocantins y Mato Grosso.

29 “Conflitos no Campo Brasil”. CPT, 2019. Ver: <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/5167-conflitos-no-campo-brasil-2019>

venta en el mercado de tierras.<sup>30</sup> Cerca del 43.8% del territorio nacional se identifica como propiedad privada, insertada en el mercado de tierras.

El Banco Mundial viene invirtiendo en varios proyectos en los estados (provincias) del Cerrado y Matopiba, con el objetivo de uniformar la regularización ambiental y de tierras en la región (con la provincia de Piauí como caso piloto), así como para la digitalización de la tierra. Cerca de 45 millones 500 mil dólares con recursos destinados al cambio climático (Climate Change Mitigation Trust Fund) fueron contratados en préstamos sólo para la inscripción de los inmuebles rurales en el Catastro Ambiental Rural (CAR).<sup>31 32 33</sup> A partir de 2012, con la aprobación del nuevo Código Forestal, el CAR se hace obligatorio para la regularidad de la función socioambiental de los inmuebles rurales en el país.

Al igual que en los otros países analizados, se realizó una digitalización masiva georreferenciando la ubicación y el tamaño de los inmuebles rurales, así como de las áreas ambientales protegidas obligatorias por Ley en el CAR. Como el propio declarante proporciona las informaciones para inscribirse en el catastro ambiental y no se requieren documentos que comprueben el origen de la tenencia o propiedad de los inmuebles particulares, se han producido numerosos fraudes con el fin de lograr el acaparamiento/grilaje de tierras. Por decreto, Brasil autoriza hoy la regularización de la tenencia de tierras de hasta 1500 hectáreas por titular, con la emisión de título

---

30 El 11% de las Unidades de Conservación; 13.2% de territorios indígenas homologados o no; 0.4% de áreas militares; 6.4% de tierras públicas no destinadas; 16.6% de tierras devolutas; 0.2% de territorios comunitarios (Asentamientos diferenciados o Bosques tipo A); 4.9% de asentamientos de reforma agraria y 0.4% de quilombos con delimitación de área. Gerd Sparoveck *et al.* “Who owns Brazilian lands?”, *Land use policy* n°87, 2010. Atlas da Agropecuária Brasileira (Imaflora/Geolab/Esalq). Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837719304077> o en: [www.imaflora.org/atlasagropecuario](http://www.imaflora.org/atlasagropecuario).

31 En enero de 2020, el Banco anunció otros 15 millones de dólares en préstamos a las provincias que integran el llamado Matopiba. En “Matopiba vai receber 15 milhões de dólares do Banco Mundial para investimentos em 2020”. Parlamento Piauí, 22 de enero de 2020. Ver:

<https://www.parlamentopiauui.com.br/blogs/paulo-oliveira-pincel/matopiba-vai-receber-us-15-milhoes-do-banco-mundial-para-investimentos-184403.html>. Consultado el 29 de abril de 2020.

32 El proyecto actual “Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão social” (Proyecto n° P129342), de 120 millones de dólares, hasta el 31 de diciembre de 2020, incluye unos 5 millones de dólares para el “fortalecimiento de los derechos de propiedad bienes inmobiliarios”, incluyendo explícitamente “agricultores de tamaño mediano y grande” en el proceso de regularización. Ver: <http://documents.worldbank.org/curated/en/423181468213891806/pdf/PID-Print-P129342-12-01-2015-1448983947229.pdf>

33 *Projeto Federal Pro Cerrado* (Proyecto Federal Pro Cerrado) (P150892), de 2015-2018, incluso con apoyo a reformas legales e inscripción de 3 mil 700 pequeños agricultores y 280 medianos y grandes propietarios rurales (4 millones 300 mil dólares/Climate Change Mitigation Trust Fund); *Projeto de regularização ambiental dos imóveis no Cerrado* (Proyecto de regularización ambiental de los inmuebles en el Cerrado) (P143334), de 2015-2021, para inscribir y georreferenciar inmuebles en el CAR e integrar en el SICAR 23 mil medianos y grandes agricultores y 190 mil pequeños agricultores (32 millones 400 mil dólares, BIRD/Strategic Climate Fund Credit para varias provincias del Cerrado y Matopiba); así como proyectos específicos con las provincias de Piauí (P143362) y Bahía (P143376), de 2014-2017 (4,4 millones de dólares para cada provincia, DEFRA y Climate Change Mitigation Trust Fund). Disponible en: <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/>



de propiedad privada sobre tierras públicas con base en el Catastro Ambiental Rural (CAR) e informaciones autodeclarativas.<sup>34</sup>

Bancos y organismos públicos vienen negando la legalidad de la inscripción de los territorios colectivos en el CAR, exigiendo la inscripción individual como inmueble rural particular para conceder acceso a crédito y políticas públicas, lo que viene generando un verdadero *borrado de los territorios colectivos del mapa*. Sólo el 6% del territorio catastrable, o 34 millones 500 mil hectáreas, fueron declarados tierras indígenas, territorios quilombolas y territorios de pueblos y comunidades tradicionales, aunque los datos oficiales indican que tan sólo los territorios indígenas ocupan 117 millones de hectáreas, 13.7% del territorio nacional (FUNAI, 2020).<sup>35</sup> Además, se realizaron varios catastros sobre la misma área, lo que generó, hasta marzo de 2019, un 30% más de área catastrada que el territorio brasileño susceptible de catastro (GRAIN, 2019) exponiendo el caos relativo a la tenencia de tierras en el país y legitimando un mercado de tierras de títulos podridos<sup>36</sup>.

---

34 Actualmente, el Decreto 10.165/2019 y la Instrucción Normativa núm. 100/2019 del INCRA autorizan, contradiciendo la Ley, solicitudes de regularización de tenencia de tierras resultantes de invasiones de tierras públicas en todo el país entre el 5 de mayo de 2014 y el 10 de diciembre de 2018 para compra directa en la Amazonia Legal. Ver “Legalização do grande roubo de terras públicas no Brasil: agronegócio, desmatamento e o caldeirão de futuras pandemias”. 2020. Ver: <https://grain.org/e/6455>.

35 Datos de la Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Ver: <http://funai.gov.br/index.php/indiosno-brasil/terras-indigenas>. Consultado al 29 de abril de 2020.

36 “Regularização ambiental e fundiária tensionam pela massiva privatização das terras públicas e territórios coletivos no Brasil”. 2019. <https://grain.org/e/6219>.



Está ocurriendo también una masiva titulación individual dentro de los asentamientos de reforma agraria. Sólo en 2017 el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) emitió 123 mil títulos individuales, un récord en comparación con los gobiernos anteriores, cuyo promedio en-

tre 2003 y 2016 fue de unos 20 mil títulos al año, un fenómeno que viene generando **más propietarios y menos asentados**.<sup>37</sup>

Además del CAR, se han utilizado los catastros digitales de tierras de manera fraudulenta, intentando valerse de la ley de regularización de tierras, la llamada Ley del “grilagem” (o Ley de acaparamiento).<sup>38</sup> Cerca del 91% del territorio nacional se autodeclaró *inmueble rural particular* en el Sistema Nacional de Catastro Rural (SNCR), un aumento de 1/3 de 2016 a 2018, desde la edición de la denominada Ley del “grilagem”.<sup>39</sup> Además del mercado de tierras sobre títulos podridos, estos catastros, como lastre para la emisión de títulos de propiedad, facilitan la emisión de títulos financieros para garantías y contrapartidas de financiaciones privadas con deudas que tienen lastre en patrimonios creados sobre los inmuebles rurales.

**Digitalización y financiarización de la tierra, los recursos naturales y el sistema agroalimentario.** Una verdadera financiarización de la tierra, de los recursos naturales y del sistema agroalimentario está en marcha en el país, sobre todo a través de la estructuración de un sistema crediticio financiado por el mercado de capitales y ya no dirigido por el Estado, lo que exige una creciente liberación de la tierra como propiedad privada, principal garantía para financiamientos, y reducción de la burocracia en los procesos de regularización de la tenencia de la tierra, con el fin de agilizar los procesos de titulación.<sup>40</sup>

La emisión de nuevos títulos como las Cuotas de Reserva Ambiental (CRA) con lastre en las áreas de vegetación nativa georreferenciadas por el CAR,<sup>41</sup> el mercado de crédito de carbono,<sup>42</sup> así

---

37 Jualiana Malerba y Girolamo Treccani, “*Mais proprietários e menos assentados. Como e por que a atual política fundiária ampliará a concentração de terras*”. FASE. Río de Janeiro, 2010. Ver: [https://fase.org.br/wp-content/uploads/2019/12/terra\\_territorio\\_n1-3.pdf](https://fase.org.br/wp-content/uploads/2019/12/terra_territorio_n1-3.pdf).

38 Desde 2016, la llamada “Ley del grilagem” (Ley de acaparamiento) autoriza la condonación del crimen de invasión de tierras públicas que se produjo hasta el 22 de julio de 2018 con hasta 2500 hectáreas en la Amazonia Legal, incluso por parte de empresas, mediante pagos muy por debajo del valor de mercado. La Ley permite la privatización a favor de grandes propietarios de hasta 55 millones de hectáreas de tierras públicas federales no asignadas, ubicadas en regiones de territorios indígenas y comunidades quilombolas.

39 Paulo Alentejano, “O mistério do crescimento exponencial das terras cadastradas no Incra e a MP 910: prenúncio de um crime em andamento”. 2020. Ver: <https://outraspalavras.net/outrasmidias/alerta-grilagem-de-terras-dispara-no-pais/> Consultado el 11 de septiembre de 2020.

40 Según las informaciones del Ministerio de Economía, sólo en 2019 se invirtieron unos 160 mil millones de reales en LCA, 40 mil millones de reales en el CRA y 9 mil millones de reales en el CDCA. Junior Aleixo, “A Lei do Agro e a busca por uma ‘nova safra de proprietários’”. Ver: <https://jornalggn.com.br/desenvolvimento/a-lei-do-agro-e-a-busca-por-uma-nova-safra-de-proprietarios-por-junior-aleixo/>

41 Como el CAR es autodeclarativo y no tiene una fecha límite para verificar las informaciones y la georreferenciación por ley, estos títulos verdes pueden nacer podridos (*sub prime*). Según el índice de la Bolsa de Valores Ambiental BVRio, 1 CRA o 1 hectárea de vegetación nativa puede variar entre 3 mil reales (600 dólares) y 50 reales (10 dólares), dependiendo del bioma, el Estado y el valor de la tierra, lo que significa un mercado de al menos 9 mil millones de reales (unos 2 mil millones de dólares). Ver: <https://grain.org/e/6219>

42 Decreto 10144/19, art. 3, IX - la formulación, regulación y estructuración de mecanismos financieros y de mercado para fomentar e incentivar la reducción de emisiones derivadas de REDD+.



como la reformulación de títulos del agronegocio ya existentes como activos financieros o valor inmobiliario emitidos también sobre servicios ambientales, incluso en moneda extranjera (Ley del Agro 13.986/2020),<sup>43</sup> permiten la garantía de ganancias no sólo a partir de los servicios agropecuarios (de cultivo y ganadería) tradicionales, sino también de los “servicios ambientales” a través del mercado de capitales.<sup>44</sup>

La Cuota de Reserva Ambiental (CRA), así como los numerosos títulos del agronegocio (Certificado de Recibos por Cobrar del Agronegocio-CRA; Cédula de Producto Rural-CPR y CPRF; Cédula Inmobiliaria Rural-CIR, entre otros) se negocian ahora en los mercados financieros, como las bolsas de valores, las operaciones extrabursátiles y los derivados, facilitando así la entrada de inversionistas institucionales no bancarios en el sector. Estos títulos financieros garantizan la reserva de “patrimonios rurales”, como la tierra (o fracciones de ella), la cosecha futura o igualmente los servicios ambientales, para saldar las deudas de la agroindustria, poniendo la tierra y los recursos naturales en manos de unos pocos inversionistas del mercado de capitales, sobre todo extranjeros.

La digitalización de la gobernanza de la tierra por medio del vínculo entre el catastro georreferenciado y el registro de inmuebles se convierte en el nuevo *lastre*, así como un *medio* eficiente para la ejecución de transacciones de los nuevos valores sobre la tierra como activos mobiliarios en esta fase digital de la economía financiarizada. El Matopiba es un caso concreto capaz de demostrar la estrecha conexión entre la digitalización, la titulación y la financiarización de la tierra, los recursos naturales y la cadena agroalimentaria.

## COLOMBIA-ORINOQUÍA

Colombia fue el primer experimento de Reforma Agraria Asistida por el Mercado (RAAM) en América Latina, implementado por el Banco Mundial (Ley 160 de 1994) con el objetivo principal de abrir la tierra al control de las élites locales, en particular el narcotráfico, a través de la garantía de títulos de propiedad privada.

El Censo Nacional Agropecuario de 2014 mostró que Colombia es el país con una de las mayores concentraciones de tierras en América Latina: 81% de la tierra del país se concentra en 1% de las explotaciones agropecuarias (de cultivo y ganadería).<sup>45</sup> <sup>46</sup> Además, un 67% de los 7 millones de hec-

---

43 Es el caso del Certificado de Recibibles del Agronegocio (CRA) y el Certificado de Derechos Crediticios del Agronegocio (CDCA). Este último pasa a poder ser emitido por personas legales (jurídicas) que ejercen actividad sobre productos forestales, extractivos y de la acuicultura, además de la actividad agrícola y ganadera.

44 La contabilidad de estos nuevos títulos está cada vez más lanzada en un sistema electrónico por parte de la autoridad financiera autorizada, cuyas transacciones y obligaciones se realizan de forma digital, abarcando y acelerando las negociaciones de valores sobre la tierra.

45 *Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. Informe 2018*, p. 186. Ver: <https://www.servindi.org/actualidad-noticias/06/07/2019/un-nuevo-informe-sobre-el-acceso-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica>. Ver también: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/desigualdad-en-la-propiedad-de-la-tierra-en-colombia-32186>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

46 Datos actualizados por la OXFAM, según Censo de 2014. Ver tabla en: “Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca”. 2018. Disponible en: <https://sostenibilidad.semana.->

táreas en producción en el país se encuentran en el 0.4% de las propiedades de más de 500 hectáreas.<sup>47</sup>



**Llanos, Colombia. Photo : Foto: [www.lacoladerata.com](http://www.lacoladerata.com)**

En el territorio colombiano se han venido dando dinámicas de concentración de tierras, sobre todo por la ausencia de políticas redistributivas que recuperen tierras privadas ilegales y suspendan las nuevas adquisiciones para destinarlas a los beneficiarios prioritarios (pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos vulnerables y víctimas del conflicto).<sup>48</sup> Así, hay un verdadero proceso de *acaparamiento de tierras* legal en el país, que se sustenta en la política en la asignación de los *baldíos de la Nación*, sin límites en cuanto al tamaño para la asignación a las entidades públicas y para exploración minera, así como para el uso de empresas especializadas en el sector agropecuario en Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE)<sup>49</sup>. Especialmente después del Acuerdo de Paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en septiembre de 2016 y el compromiso de implementar una Reforma Agraria Integral para la restitución de las casi 7 millones de hectáreas que han sido objeto de desplazamientos forzados por el conflicto armado, ex-

---

[com/impacto/articulo/concentracion-de-la-tierra-en-colombia-el-1-por-ciento-de-las-fincas-mas-grandes-ocupan-el-81-por-ciento-de-la-tierra/40882](http://com/impacto/articulo/concentracion-de-la-tierra-en-colombia-el-1-por-ciento-de-las-fincas-mas-grandes-ocupan-el-81-por-ciento-de-la-tierra/40882). Consultado el 11 de septiembre de 2020.

47 Censo Agropecuario Nacional de 2014, p. 65. Ver: <https://www.dane.gov.co/files/images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-censo-nacional-agropecuario/CNATomo2-Resultados.pdf>. Ver también: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario>.

48 En 2019 no hubo creación de Zonas de Reserva Campesina por parte de la Agencia Nacional de Tierras y no hay meta para la titulación de territorios colectivos para pueblos indígenas y afrodescendientes en el plan nacional de titulación, mientras hubo titulación de 5.635 inmuebles privados en 2019. En “Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. Informe 2019”, p. 182. Ver: <http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Acceso-a-la-tierra-y-territorio-en-Sudamerica-Informe-2019>. p. 182

49 Los “baldíos” son áreas que no han demostrado ser propiedad privada, son bienes no comerciales, inalienables, inembargables e imprescriptibles.

iste una verdadera disputa por las áreas pos-conflicto entre el mercado de tierras de baldíos y su asignación a las víctimas del conflicto.<sup>50</sup>

La acumulación irregular de *baldíos* es especialmente intensa en la región de la Orinoquía o Llanos Orientales, principalmente en Atillanura, **considerada la última frontera agrícola de Colombia.**<sup>51</sup> La región está históricamente ligada a la ganadería extensiva improductiva, con la consiguiente especulación sobre el valor de la tierra (alcanzando aumentos anuales de hasta 130%, según Fedepalma), teniendo la mayor concentración de tierras del país, con inmuebles de más de 10 mil hectáreas, sobre todo a lo largo de los ríos Meta, Orinoco y Guaviare.<sup>52 53</sup>

Ha habido varios intentos de modificar el régimen de *baldíos* para ampliar la transferencia subsidiada de tierras públicas a grandes y medianos propietarios hasta llegar a la reglamentación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) por la Ley 1.776 de 2016. Este nuevo instrumento de ordenamiento territorial permite la asignación de tierras *baldías* mediante contrato/concesión por tiempo indefinido a favor de la agroindustria y en detrimento de la economía campesina. Además de la concesión subsidiada de tierras, las actividades instaladas en las ZIDRES se convierten en las principales destinatarias de beneficios de incentivo y financiamiento con líneas de crédito privilegiadas.<sup>54</sup> La Ley de 2019 exime incluso el requisito de recopilar los títulos



*Cultivo de arroz en los llanos. Foto: ©2011CIAT/NeilPalmer @Flickr*

50 Solo se otorgaron 253 resoluciones de adjudicación a 1753 hectáreas hasta marzo de 2019 para restitución de tierras, según la Procuraduría General de la Nación. En *op. cit.* “Acceso a la tierra. Informe 2019”, p. 182.

51 Atillanura es una subregión de la Orinoquía compuesta por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Maripiripán en el departamento de Meta y La primavera, Cumaribo, Puerto Carreño y Santa Rosalía en Vichada. En esta subregión las Unidades Agrícolas Familiares (UAFs), que son las unidades mínimas del inmueble rural, pueden llegar a 1300 hectáreas.

52 Aunque 40% del territorio colombiano es adecuado para las actividades de cultivo y ganadería, sólo el 19% (unas 7 millones 200 mil hectáreas) se dedica a la agricultura y el 80.5% a la ganadería, es decir, 40 millones de hectáreas, de las cuales 20 millones tienen potencial agrícola. En Censo Nacional Agropecuario, 2014. A su vez, la minería y el petróleo ocuparon, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 6 millones 600 mil hectáreas en 2012, de las cuales un millón y medio serían las mejores tierras agrícolas del país (IGAC, 2012). En *Concentración y extranjerización de tierras productivas en Colombia*. FAO, Bogotá, 2017, p. 110. Ver: <http://www.fao.org/3/a-i7843s.pdf>

53 La Federación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (o “*dendê*”) tuvo varios de sus miembros designados para puestos directivos en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Recuperación de Tierras (URT), manteniendo un esquema de puertas giratorias entre gremios y el Estado. In *Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica*. 2019, p. 192.

54 Las ZIDRES no pueden, o no podrían, establecerse sobre áreas prioritarias como los Resguardos Indígenas titulados o que están en proceso de titulación, territorios colectivos de las comunidades negras, Zo-



de los inmuebles en la zona, así como el de adecuar el proyecto agrícola a las políticas de seguridad alimentaria del país.<sup>55</sup>

De las cerca de 7 millones 200 mil hectáreas (6.2% del territorio) autorizadas para establecer las ZIDRES, 5 millones 500 mil hectáreas se encuentran en los Llanos Orientales, con 4 millones 800 mil hectáreas en los departamentos de Vichada (34% de todo el departamento) y Meta (33% del departamento), principales departamentos de la ecorregión, que cuenta con proyectos de infraestructura, como la supercarretera que conecta Puerto Carreño (en construcción) capital del departamento de Vichada, con el Océano Pacífico, en el Puerto Buenaventura, una de las principales terminales portuarias del país para la exportación e importación de productos agropecuarios.<sup>56</sup>

Como no existe límite de tamaño de la propiedad, de ingresos para los beneficiarios y tiempo para los contratos de concesión de tierras para la actividad agroindustrial en estas Zonas, así como tampoco hay límite para adquirir o arrendar tierras por parte de extranjeros en el país, el establecimiento de las ZIDRES tiene como objetivo consolidar los incentivos estatales para las inversiones extranjeras directas.<sup>57 58</sup>

Entre los actores extranjeros con inversiones directas en la adquisición de tierras se encuentran la Cargill y el fondo Black River, que adquirió cerca de 25 mil hectáreas de tierras en los departamentos de Vichada a partir de sus numerosas subsidiarias, como Colombia Agro, Monica Semillas (transnacional brasileña), Poligrow, Cementos Argos, Grupo Corona, entre otros, recurriendo a la compra y acumulación ilegal de baldíos (OXFAM, 2013). Sin embargo, el crecimiento de la agricultura por contrato es el principal instrumento de control de tierras cultivables hoy en el país.<sup>59 60</sup>

**Sistema digital de gobernanza de la tierra: catastro multipropósito.** En 2010 Colombia creó el llamado Catastro Multipropósito, un sistema electrónico de catastro de inmuebles rurales

---

nas de Reserva Campesina y ecosistemas estratégicos, parques naturales y humedales. Sin embargo, la UPRA consideró los resguardos delimitados y aprobados por la ANT, excluyendo las otras áreas reclamadas. *Áreas de referência para identificar ZIDRES, Metodología para la estimación indicativa*, UPRA, 2018, p. 38-39. En: <http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11438/8641>

55 Decreto Ley 2106 que modifica la Ley 1776/16 de las ZIDRES.

56 Las Zidres también alcanzan el 5.5% del área del departamento de Casanare (404 hectáreas); el 3,7% del área del departamento de Arauca (268 hectáreas). *Op. cit.* FAO, 2017, p. 85-87.

57 La Ley de Tierras de Colombia (Ley 160 de 1994 y Decreto Ley 902 de 2017) impone un límite máximo de tamaño de hasta una Unidad Agrícola Familiar (UAF) y de patrimonio (hasta mil salarios mínimos mensuales) para los beneficiarios prioritarios —campesinos, indígenas, comunidades afrodescendientes— de las tierras identificadas como baldíos adjudicables.

58 La identificación de inversiones extranjeras directas en tierras en Colombia es imposible debido a la falta de registro oficial, la falta de información sobre el destino —qué departamento— así como al uso de países identificados como paraísos fiscales como origen de los recursos, como Suiza, Holanda, Luxemburgo, Panamá, Uruguay y Chile. Se estima que entre el 1% y el 2% de la IED se encuentra en el sector de la agricultura, silvicultura, pesca y caza. *Op. cit.* FAO, 2017, p. 115-116.

59 Black River CPF Nazareth Holdings LLC.; Black River CPF Colombia Agro LLC; Black River CPF el carriaco holdings LLC; Black River CPF La Anita; Black Rive CPF La Cartera; Black River CPF La Cristalina Holdings LLC; Black River CPF La Estancia Holdings; Black River CPF Los Gualandayes Holdings; Black River CPF RL Cariaco Holdings LLC.

60 Ver: <https://www.elspectador.com/noticias/economia/reforma-a-ley-de-tierras-sin-camino-despejado/>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

con georreferenciación del área, con el objetivo de avanzar en la gobernanza agraria en el país. Hasta marzo de 2015, sólo el 46% de los catastros existentes encontraron su matrícula correspondiente en la oficina de registros de inmuebles (notario), y de éstos sólo 2% tuvieron correspondencia de información con el tamaño del área (Conpes 3641/2010). Un 64% del área total catastrada tiene catastro desactualizado, y puede incluso pertenecer a otro titular.<sup>61</sup>

Esto se debe a que esta digitalización de la información agraria en los catastros se basa en imágenes de satélite y documentos e informaciones proporcionadas por los propios solicitantes (autodeclaración) sobre el uso y ocupación de los inmuebles, sin requerir los documentos del registro público de la propiedad de inmuebles rurales. Así como ocurre en otros países analizados, estas informaciones contradictorias entre el sistema de catastro y los sistemas de registro vienen generando aún más inseguridad jurídica sobre la situación de las tierras en el país, colaborando a los usos fraudulentos del catastro para generar derechos de propiedad.

El Documento Conpes 3958/2019 vincula el Catastro Multipropósito a la política de administración de tierras, lo que señala la posibilidad de emitir títulos con derechos formales de tenencia y/o propiedad basados en este sistema de catastro multipropósito, facilitando los procesos de acaparamiento, acumulación ilegal de *baldíos* y, en consecuencia, estimulando un proceso creciente de deforestación en estas áreas.<sup>62</sup> El ciclo del acaparamiento de baldíos, junto a la introducción de la ganadería y después los monocultivos de palma aceitera, son los principales vectores de la deforestación en el país.<sup>63</sup>



61 *Op. cit.* FAO, 2017, p. 67 y p. 158.

62 Según un artículo de la BBC, casi la mitad de la deforestación en áreas de bosques nativos fue causada por los procesos de acaparamiento (grilaje). En 2017 el país registró el mayor número de áreas deforestadas, cerca de 144 mil hectáreas de bosques. Ver: <http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170422-boletines/boletin-5/asi-va-posconflicto.html>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

63 Torsten Krause. "Reducing deforestation in Colombia while building peace and pursuing business as usual extractivism?". 2020. <https://journals.uair.arizona.edu/index.php/JPE/article/view/23186/22401>. La expansión de la producción de coca, que saltó de 78 mil hectáreas en 2012 a 109 hectáreas en 2017, también viene impulsando la deforestación en Colombia.

El Banco Mundial le apuesta al sistema de catastros buscando perfeccionar la formalización de los derechos de posesión y propiedad —y del mercado de tierras— mediante una gobernanza digital e integrada entre los sistemas de gobernanza de tierras. Se realizó un préstamo de 100 millones de dólares a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) entre marzo de 2019 y enero de 2025, año en el que se pretende finalizar la actualización catastral del 100% del territorio colombiano, para implantar el Catastro Multipropósito, con la emisión de 67 mil títulos, abarcando un millón y medio de hectáreas.<sup>64</sup> El plan piloto de 23 municipios incluye Puerto Gaitán, una de las ciudades más importantes de Meta, con más de 50% de su territorio perteneciente a 130 inmuebles con más de mil hectáreas, por encima, por tanto, del límite máximo de la UAF, que es de 920 hectáreas.<sup>65 66</sup>

Según datos de 2017 de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, las áreas que se pueden comercializar en el mercado de tierras suman 41 millones 800 mil hectáreas (36% del territorio), mientras que casi 67 millones de hectáreas (59%) están actualmente excluidas del mercado, entre ellas la región amazónica al sureste y el Pacífico. Hay aún 5 millones 200 mil hectáreas (5%) en áreas con derechos de propiedad limitados o condicionados, y unos 17 millones de hectáreas sin identificación de propiedad (cerca de 15% del territorio).<sup>67</sup> La inscripción de áreas excluidas del mercado de tierras o sin identificación de propiedad como inmueble rural particular en el Catastro Multipropósito es otra de las formas de acaparamiento de tierras que busca ampliar las áreas dentro del mercado de tierras.

Esta arquitectura legal y política construida para crear esta zona especial de inversión es una clara opción para asignar las llamadas *tierras cultivables de la región de la Orinoquía* (acaparamiento de tierras legal) y los subsidios públicos a actores de la cadena agroindustrial global (acaparamiento de tierras virtual) para la exportación de mercancías agrícolas de exportación, en particular agrocombustibles hechos a partir de caña de azúcar, palma y también soja y maíz, además de la ganadería.<sup>68 69</sup>

64 Proyecto núm. 165294. Ver: <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162594>. Ver también: <https://www.larepublica.co/economia/el-recaudo-municipal-subira-27-billones-con-el-nuevo-catastro-multiproposito-2902917>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

65 Ver: <http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170422-boletines/boletin-5/asi-va-posconflicto-.html>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

66 *Op. cit.* FAO, 2017, p. 178.

67 Entre los territorios fuera del mercado se encuentran los 31 millones 600 mil hectáreas de pueblos con Reservas Indígenas (el 28% del territorio), 5 millones y medio de hectáreas de las comunidades afrocolombianas (4.82%) y los cerca de 15 millones de hectáreas de parques nacionales naturales (13.15%) (OTEC, 2019, p.3). In “Territórios incluídos, condicionados e excluídos para o mercado de terras na Colombia”. UPRA, 2016. Ver: [https://www.upra.gov.co/documents/10184/74497/Plegable\\_MT\\_rurales\\_imp+%281%29%28F%29.pdf/a495f1f6-35a8-4583-a9ed-eac49275448d](https://www.upra.gov.co/documents/10184/74497/Plegable_MT_rurales_imp+%281%29%28F%29.pdf/a495f1f6-35a8-4583-a9ed-eac49275448d)

68 Más allá del interés por la tierra, existe la intención del comprador de apropiarse de subsidios y obtener crédito/financiación bancaria, utilizando las tierras o la cosecha como garantía, o simplemente especular con el valor futuro de los valores. Ver: J. McCarthy, J. Vel, y S. Afiff, “Trajectories of land acquisition and enclosure: development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions”. En *Indonesia’s Outer*



Mientras las ZIDRES tienen la intención de intensificar las inversiones en la economía extractiva, la gobernanza digital de la tierra también busca satisfacer intereses de inversiones de los mercados internacionales deseosos de ingresos especulando con tierras en áreas **sin** producción agrícola actual, como las regiones de ganadería extensiva y con bosques. Con el 53% del territorio ocupado por bosques naturales (cerca de 58 millones de hectáreas), Colombia busca movilizar su acervo de tierras mediante mercados de carbono y biodiversidad. Así, están en marcha 25 proyectos del Programa REDD+ del Banco Mundial (Forest Carbon Partnership Facility and the UN-REDD Programme).<sup>70</sup> Por lo tanto, el país también invierte en la reglamentación de los servicios ambientales para que puedan ser lastre tanto para la emisión de activos verdes como para la garantía de créditos rurales en la cadena de valor del agronegocio a través del mercado de capitales.

## ARGENTINA-CHACO

El último Censo Agropecuario en Argentina, de 2018, registró que el 1% de los inmuebles rurales entre 10 y 20 mil hectáreas controlan el 36.4% de la superficie agropecuaria (de cultivo y ganadería), mientras que el 55% de los pequeños productores con hasta 100 hectáreas ocupan el 2,2% de la tierra<sup>71</sup>. De los 266 millones 700 mil hectáreas de superficie rural, 108 millones 500 mil están ocupadas con pastos para la ganadería y 40 millones 200 mil hectáreas con cultivos agrícolas, de las cuales 16 millones 300 mil hectáreas con soja y 7 millones de hectáreas con maíz (FAOSTAT, 2018).<sup>72 73</sup> Mientras el territorio argentino en su conjunto registró, entre 1999 y 2014, un aumento de la superficie destinada a la producción de soja del 85%, en las provincias de Chaco y Santiago del Estero (en el Chaco argentino) hubo un aumento de 178% y 210%, respectivamente.<sup>74 75</sup>

---

*Islands. Journal of Peasant Studies*, 2012.

69 El área sembrada con caña de azúcar entre 2004 y 2009 pasó de 197 mil a 215 mil hectáreas, mientras que el área con palma creció 100 mil hectáreas, siendo el mayor productor de América Latina. Los cultivos forestales pasaron de 175 mil en 2002 a 376 mil en 2009. El Programa de Transformación Productiva ofrece incentivos para sectores agrícolas como exención fiscal (de impuestos) tanto para los agrocombustibles como para el cultivo de palma, coco, soja y etapas de procesamiento de productos agrícolas. *Op. cit.* FAO, 2017, p. 100 y p. 101, y <https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/bio-combustibles.html>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

70 Chris Lang, “REDD in Colombia: continued deforestation and extractivist development”. 2020. Ver: <https://redd-monitor.org/2020/05/27/redd-in-colombia-continued-deforestation-and-extractivist-development/>. Ver también: <https://www.unredd.net/regions-and-countries/latin-america-and-the-caribbean/colombia.html>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

71 Censo Nacional Agropecuario de 2018, hace referencia al periodo entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018. CNA, 2018. <https://cna2018.indec.gob.ar/informe-de-resultados.html>.

72 “El 87% de la soja argentina se exporta a China”. Ver: [www.sitioandino.com.ar/n/256945-el-87-de-la-soja-argentina-se-exporta-a-china/](http://www.sitioandino.com.ar/n/256945-el-87-de-la-soja-argentina-se-exporta-a-china/). Consultado el 11 de septiembre de 2020.

73 Según los datos del ISAAA para 2018, el 100% de la soja y el 78% del maíz plantado en el país eran transgénicos, lo que lo convierte en la tercera mayor área con plantaciones transgénicas del mundo (unas 23 millones 900 mil hectáreas, 12% de la superficie mundial). Están liberadas seis especies vegetales y 61 variedades transgénicas: soja, maíz, algodón, patata, alfalfa y cártamo de propiedad de las empresas Monsanto-Bayer; Syngenta-ChemChina; Dow-Dupont; Indear-Bioceres, Pioneer, Basf y Tecnoplant. Disponible en: <http://www.biodiversidadla.org/Atlas>

74 Según las informaciones de la CONAB, Argentina cerró 2018 como el cuarto exportador de soja en el mundo.

El Chaco argentino se caracteriza por ser la última frontera agropecuaria del país, y está compuesto por las provincias de Formosa, el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y el este de Salta. Este territorio concentra el 59% del Gran Chaco, con cerca de 60 millones de hectáreas.<sup>76</sup> Desde el avance de la frontera agrícola, más de 80% del Chaco argentino se convirtió en tierra para pastos y producción agrícola.<sup>77</sup> La deforestación en la región del Chaco argentino es la principal característica de transformación de la frontera agropecuaria.<sup>78</sup> Se devastaron unas 300 mil hectáreas anuales entre 2010 y 2015, lo que llevó a expulsiones de la población rural, sobre todo a los pueblos indígenas, como los *wichí* y *toba qom*.<sup>79</sup> Sólo en 2020, ya se han notificado diez muertes por hambre entre los niños del pueblo *wichí*, debido a los desalojos de sus territorios resultantes del avance de la frontera agrícola que les priva de acceso a los alimentos.<sup>80</sup>



**Argentina, Gran Chaco, Salta, comunidad Wichi en peligro de un acaparamiento de tierras. Foto : WestEnd61**

75 J.A, Bernardes y G. Maldonado, “Estratégias do capital na fronteira agrícola moderna brasileira e argentina”. En J.A Bernardes. *et al.* (coords.). *Globalização do agronegócio e land grabbing: a atuação das megaempresas argentinas no Brasil*. Rio de Janeiro: Lamparina, 2017, p. 57-80.

76 Ver: <https://www.diarionorte.com/191145-soja-una-de-cal-y-otra-de-arena>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

77 Ver: <https://lcluc.umd.edu/hotspot/soy-expansion-chaco-forest-argentina>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

78 En 2018, cerca de 112 mil 766 hectáreas fueron deforestadas en las provincias que abarcan la región. La provincia más afectada fue Santiago del Estero, con 34 mil 751 hectáreas deforestadas, de las cuales 23 mil 910 eran bosques protegidos.

79 OCDE/FAO. *Perspectivas agrícolas 2019-2028. Enfoque especial: América Latina*. OCDE Publishing, Paris/Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Roma, 2019. Disponible en: [https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2019-2028\\_7b2e8ba3-es](https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/ocde-fao-perspectivas-agricolas-2019-2028_7b2e8ba3-es)].

80 Ver: <https://www.laizquierdadiario.com/Ni-un-nino-wichi-menos-marcharan-en-Salta-ante-la-emergencia-social>. Ver también la expulsión del pueblo qom: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/6760>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

La implantación de infraestructura logística para la exportación de los productos agrícolas es también uno de los fuertes inductores de deforestaciones que resultan en una transformación completa del paisaje.<sup>81</sup> El principal canal de flujo terrestre de la región, el ferrocarril Nuevo Central Argentino, que lleva la producción a los puertos de la Hidrovía Paraguay-Paraná, fue concedida a la exportadora de granos Aceitera General Deheza, lo que demuestra cómo la cadena de soja organiza esta zona de expansión.<sup>82</sup> La provincia de Santa Fe cuenta con el mayor complejo en número de terminales privadas en América Latina (Complejo Portuario San Lorenzo-Puerto General San Martín), sirviendo como base logística para empresas extranjeras, como las tradicionales ABCD, pero también para nuevas inversiones, como la entrada de la Glencore en una *empresa conjunta* con la argentina Vincentín (Renova), entre otras. El fondo Pátria Investimentos/Blackstone detenta también un 30% del mercado de transporte fluvial en la Hidrovía.<sup>83 84</sup>

Es cada vez más fácil para el capital extranjero controlar tierras en el país. En 2016, el gobierno de Macri, por Decreto, flexibilizó los criterios de acceso a la tierra por parte de extranjeros al excluir las tierras en usufructo, superficie, uso, vivienda y anticresis del límite nacional para el acceso.<sup>85 86</sup> Con esta alteración, un 20% de la superficie agropecuaria en Argentina explotada por arrendamiento o contrato, no entran en la prohibición de adquisición de tierras por extranjeros, tampoco los 66.5% de la superficie explotada por contrato en el caso de las oleaginosas, como la soja (CNA, 2018).<sup>87</sup>

La norma de 2016 también permite la extranjerización de cuerpos de agua (lagos, lagunas) por aprobación tácita, es decir, si dentro de los 10 días no existe oposición formal de la autoridad provincial de aguas, se emite el certificado de habilitación de adquisición o posesión por parte de extranjeros del inmueble con presencia de cuerpos de agua. Los inmuebles rurales ubicados en áreas consideradas como “*zona industrial*” o que desarrollan *proyectos de generación de energía renov-*

---

81 Muchas provincias del Chaco argentino, como Charata, se han convertido en verdaderos polos de empresas transnacionales distribuidoras de insumos agrícolas, como la BASF, Monsanto y Nidera (ahora COFCO). En J.A Bernardes y G. Maldonado, Op. Cit. 2017, p. 71.

82 La Hidrovía Paraná-Paraguay, que se extiende por 3 mil 442 km entre el Puerto de Cáceres, en Mato Grosso (Brasil), al norte, y Puerto Nueva Palmira (Uruguay), es la principal vía de flujo de mercancías agrícolas de Argentina, por la que transita 75% de su producción agroindustrial, así como de todos los países integrantes de la Cuenca del Plata: Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, principalmente para el flujo de la soja, sobretodo de Bolivia y Paraguay, ya que es la única ruta de acceso al océano hasta el momento. En su curso se encuentran los principales puertos de salida de soja de la región, muchos de los cuales pertenecen a *tradings* del agronegocio.

83 La agroexportadora se declaró en bancarrota en 2019, declarando una deuda de 300 millones de dólares al Banco Nación.

84 Ver: <http://hbsa.com.br/es/la-empresa>.

85 El Decreto núm. 820/16 modificó la Ley 26.737/2011.

86 La Ley 26.737/2011 aumentó del 6% al 15% la superficie máxima del territorio nacional, la provincia y el municipio para la adquisición o tenencia de tierras por extranjeros, aplicando también el límite de 30% de la misma nacionalidad y hasta 1000 hectáreas por titular en cada zona núcleo o superficie equivalente, que puede oscilar entre 30 mil (Provincia de Santa Cruz y Salta, por ejemplo) y 200 hectáreas (Provincia de Mendoza), dependiendo de la ubicación, la calidad del suelo y otros criterios.

87 Según el Registro Nacional de Tierras Rurales de 2015, la superficie rural extranjerizada en Argentina alcanza el 6% del territorio. Ver: [http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Registro\\_Nacional\\_Tierras\\_Rurales.pdf](http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Registro_Nacional_Tierras_Rurales.pdf).



*able* tampoco están sujetos a los límites de adquisición por parte de extranjeros, abriendo la economía de “transición verde” al mercado internacional.

Además, el Decreto también aumenta del 25% al 51% el porcentaje de capital extranjero de empresas controladas para que sean consideradas extranjeras. Y cada vez más, la tierra pertenece a empresas de capital abierto con inversiones extranjeras. El Censo de 2018 mostró que cerca de 38 millones de hectáreas, una cuarta parte de la superficie cultivable, es propiedad de Sociedades Anónimas (SA) y que incluso un 80% de las 16 millones 800 mil hectáreas controladas por extranjeros en el país pertenecen a empresas agropecuarias, con 13 millones de hectáreas (80.2%) en propiedades de más de 10 mil hectáreas.<sup>88</sup>

Con tales modificaciones a la Ley, las cifras oficiales sobre extranjerización han disminuido si se las compara al primer informe publicado en 2015, aunque en realidad pueden ser mucho mayores. Las provincias del norte del país y en el Chaco siguen teniendo los mayores porcentajes de presencia de capital extranjero: la provincia de Salta, que contaba con el 11.8% de la superficie extranjerizada en 2015, cayó al 10.54% en 2020; la provincia de Corrientes, que contaba con el 13.86% en 2015, cayó a 9.72%.<sup>89</sup> Esta importante disminución de los datos oficiales también se relaciona con el proceso de digitalización de las tierras en el Catastro Nacional Territorial, ya que los inmuebles con certificado catastral georreferenciado tienen prioridad en el proceso de regularización. Los inmuebles que se dejaron de considerar como propiedad de extranjeros ya pudieron tener sus títulos constituidos y rectificados como nacionales, sin restricciones, a partir de 2016.

---

88 Censo Nacional Agropecuario de 2018. Ver: <https://cna2018.indec.gob.ar/informe-de-resultados.html>.

89 Registro Nacional de Tierras Rurales 2015, p. 15-16, y tabla 2020. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/justicia/tierrasrurales/extranjerizacion-tierras-2020>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.



**Catastro especial y registral de tierras como base de derechos de propiedad.** Toda persona natural o legal (jurídica) que tenga la intención de constituir, modificar o transmitir derechos reales sobre un bien inmueble en el país debe contar con un **certificado catastral** emitido a partir de la verificación de las informaciones georreferenciadas (GPS) en el catastro nacional de tierras y

de los documentos registrales del inmueble rural. Por lo tanto, el catastro se convierte en la base legal para la emisión y legitimación de títulos de propiedad en el país, de acuerdo con la Ley 26.209/2007.

De este modo, Argentina también viene integrando informaciones territoriales basadas en la tecnología de precisión geoespacial, pero, a diferencia de Brasil y Colombia, el Catastro espacial ya está vinculado al sistema de registro de inmuebles para la emisión de títulos de derechos de propiedad. Si bien exige la conformidad entre las informaciones del catastro y la documentación del registro del inmueble, no existe una norma general para verificar la procedencia de los orígenes del título, la naturaleza de la posesión y el cumplimiento de la función social de la tierra antes de la validación de los títulos. Cada provincia define su procedimiento para la regularización de la tenencia de la tierra, mientras que el Programa Nacional de Titulación Rural (ProntAR) de 2013 permite la asignación de tierras públicas a favor de *cooperativas y consorcios agropecuarios* que tengan posesión mansa y pacífica, continua e ininterrumpida.

Por un lado, quienes no tengan acceso a la tecnología de georreferenciación no tendrán derecho a la emisión del certificado catastral y del título, y por otro, la integración de la información geoespacial sin un análisis documental adecuado del registro y la naturaleza de la posesión puede terminar validando el acaparamiento histórico de tierras públicas y sobre los territorios de los pueblos tradicionales en el país, incluso a favor de extranjeros, teniendo en cuenta la desregulación de los límites de acceso a la tierra por parte de extranjeros.

Según el Informe de la Dirección Nacional de Tierras y Unidades Agropecuarias, hasta 2017 se habían firmado convenios con siete provincias, principalmente del norte del país, incluso en la región del Chaco, con la titulación de 40 mil 216.5 hectáreas beneficiando a 1040 productores, por regla general vinculados a la producción pecuaria, sin aclarar si son pequeños, medianos o grandes, personas naturales o legales (jurídicas), nacionales o extranjeras.<sup>90</sup>

Además de encubrir la situación de las tierras, la digitalización del catastro de inmuebles rurales en Argentina y el ProntAR proporcionan la seguridad jurídica necesaria para la emisión de títulos financieros con lastre sobre el patrimonio agrario, a ejemplo de los *warrants* financieros y los instrumentos de fideicomisos, en sustitución del crédito estatal.<sup>91</sup> Entre 2004 y 2008, la constitución de propiedades fiduciarias temporales en el sector rural aumentó en 271%, impulsando la expansión de la soja.<sup>92</sup> Según el Censo de 2018, 208 fideicomisos detenían 235 mil hectáreas en el país, lo que

90 Informe gestão 2016-2017. Dirección Nacional de Tierras y Unidades Agropecuarias. Ver: [https://www-magyp.gob.ar/sitio/areas/tierras/informe\\_de\\_gestion/180803\\_informe\\_de\\_gestion.pdf](https://www-magyp.gob.ar/sitio/areas/tierras/informe_de_gestion/180803_informe_de_gestion.pdf)

91 La propiedad fiduciaria es una propiedad temporal a nombre del acreedor fiduciario (generalmente bancos y, más recientemente, fondos de inversión) a cambio de financiamiento, por regla general, inmobiliario (bastante utilizado en la construcción civil). La Ley 24.441/94 pasó a permitir la constitución de personas legales temporales por fondos de inversión que pasan a detener patrimonios rurales en garantía de préstamos, como una forma de apalancar inversiones en el agronegocio, principalmente a partir de los años 2000. En S. Frederico y C. Gras, “Globalização financeira e land grabbing: constituição e translatinização das megraempresas argentinas”. En J.A. Bernardes *et al.* (coords). *Op. Cit.* 2017, p. 11-32.

92 D. Fernández, “Concentración económica en la región pampeana: el caso de los fideicomisos financieros”, *Mundo Agrario*, v. 11, n. 21, 2010.

también aseguró una mayor estabilidad para las operaciones con *avales* financieros emitidos en moneda extranjera (dólar) a los que les llaman *warrants*.<sup>93 94</sup> Éstos representaron el 87% de las emisiones de certificados en 2018, lo equivalente a unos 806 millones de dólares.<sup>95</sup> La “translatinización” (las empresas multilatinas) de megaempresas argentinas, como Los Grobo, fue impulsada por esta financiarización del crédito rural argentino.

## PARAGUAY-CHACO

La creciente concentración y extranjerización de tierras en Paraguay es impresionante. Según datos del último Censo Agropecuario de 2008, 90% de la tierra en Paraguay está en manos de 12 mil grandes propietarios, y los 600 inmuebles con más de 10 mil hectáreas ocupan más del 40% del territorio del país, es decir, cerca de 12 millones 600 mil hectáreas.<sup>96</sup> Entre 1991 y 2018, la frontera agrícola se expandió en 8 millones de hectáreas, siendo la soja (transgénica) y la ganadería sus principales vectores de expansión.<sup>97 98</sup> Por otro lado, la agricultura familiar con inmuebles de hasta 20 hectáreas representa el 83.5% de las propiedades, pero ocupa sólo el 4.3% del territorio paraguayo.



93 CNA, 2018. Ver: <https://cna2018.indec.gob.ar/informe-de-resultados.html>, p. 91.

94 Emitido por cualquier productor rural titular de producción rural, incluso en dólares. Son más comunes en la época de cosecha de soja entre mayo y junio, regulados por la Ley 9643. Según los datos del MAG-YP, la provincia del Chaco fue la sexta provincia en emitir el mayor número de *avales* financieros en 2018, totalizando 33 billones 604 mil 885 millones de dólares. Disponible en: <https://www.warrantsnet.-com/port-warrants-1.html>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

95 Ver: [https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss\\_mercados\\_agropecuarios/\\_warrants/\\_archivos/000998\\_Publicaciones/181200\\_Informe%20Warrants%202018.pdf](https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/_warrants/_archivos/000998_Publicaciones/181200_Informe%20Warrants%202018.pdf)

96 Censo Agropecuario Nacional de Paraguay 2008. Ver más en: [https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/resultados\\_generales\\_cna08.pdf](https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/resultados_generales_cna08.pdf)

97 En comparación con el Censo de 1991, la frontera agrícola y pecuaria se expandió de 23 millones 800 mil hectáreas a 31 millones de hectáreas.

98 De las 3 millones 500 mil hectáreas cultivadas con soja, 3 millones 400 mil son transgénicas (97%). Hasta 2012, sólo se había aprobado un evento transgénico, el de la “soja RR” de Monsanto. Tras el golpe parlamentario contra el presidente Lugo, ahora son 32 los eventos transgénicos aprobados entre soja, maíz y algodón de las transnacionales INDEAR, BASF, Syngenta-ChemChina, Dow y Bayer-Monsanto. Atlas del Agronegocio transgénico en el Cono Sur, p 19.: <http://www.biodiversidadla.org/Atlas>.



En 2017, la soja ocupó el 70% del área cultivada en el país, principalmente en la región Oriental, con el 90% de su producción realizada por empresas brasileñas.<sup>99 100</sup> Tal ocupación de la superficie del país con monocultivos de soja convierte a Paraguay en el sexto mayor productor y el cuarto mayor exportador de esta mercancía agrícola del mundo. A su vez, la ganadería ocupaba un 54% de la superficie agropecuaria (de cultivo y ganadería) total, con 10 millones 500 mil hectáreas en la parte occidental del Chaco (CNA, 2002), lo que lo convirtió en el sexto exportador mundial de carne de vacuno, aunque más de la mitad de las exportaciones también son realizadas por empresas de capital brasileño (JBS, Minerva, Frigorífico Concepción y Frigomec).<sup>101 102 103</sup>

El Censo de 2008 señaló que un 24% de la superficie de Paraguay está en manos de extranjeros, la mitad de los cuales son brasileños, principalmente en la región Oriental, aunque el 22% del departamento de Alto Paraguay en la Región del Chaco Occidental ya pertenece a brasileños, así como cerca de 2 millones de hectáreas y el 12% de la actividad agropecuaria se realiza con capital uruguayo, principalmente inmobiliarias agrícolas.<sup>104 105</sup> Tomando en cuenta la expansión de la frontera agrícola hasta la cosecha de 2016-2017, principalmente sobre el Chaco, BASE-IS actualiza el Censo de 2008 estimando que cerca del 35% del territorio agrícola en Paraguay está bajo control extranjero directo o indirecto.<sup>106</sup>

Se considera la región del Chaco paraguayo como la última frontera agrícola del país y, por tanto, uno de los objetivos de inversión por parte de extranjeros en negocios con tierras en el mundo. Esta región, que se ubica en la parte occidental del país, comprende los departamentos del Alto Paraguay y se extiende hasta el departamento de Presidente Hayes, en el Bajo Chaco, con 24 millones de hec-

99 De los 4 mil 949 millones de hectáreas de área cultivada en Paraguay en 2018, 3 mil 510 millones de hectáreas fueron cultivadas con soja y un millón 70 mil hectáreas con maíz. FAOSTAT, 2018.

100 Marielle Palau (coord.). *Con la Soya al Cuelo*, 2018. *Informe sobre agronegocios en Paraguay*. BASE-IS, 2018, p. 16.

101 Según las informaciones del Censo de 2008, cerca de 17 millones 600 mil hectáreas estaban ocupadas por la ganadería, 10 millones 500 mil hectáreas en la parte occidental del Chaco y 7 millones de hectáreas en la parte oriental.

102 FAO/USDA, 2018: <http://beef2live.com/story-worldbeef-exports-ranking-countries-0-106903>:

103 OXFAM. Yvy Jára. “Los dueños de la tierra en Paraguay”, 2017, p. 22. Disponible en: [https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file\\_attachments/yvy\\_jara\\_informe\\_oxfamenparaguay.pdf](https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/yvy_jara_informe_oxfamenparaguay.pdf). Minerva impulsó en 2013, una inyección de 85 millones de dólares de la IFC (International Finance Corporation), brazo del Banco Mundial, para sus negocios en Paraguay, lo que lo convirtió en el grupo líder de mercado en el país, seguido por el Frigorífico Concepción. In “Indústria brasileira de carne avança sobre o Chaco paraguaio”: <https://reporterbrasil.org.br/2018/07/a-industria-brasileira-da-carne-avanca-sobre-o-chaco-paraguaio/>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

104 Son propiedad de brasileños: el 60% del departamento de Canindeyú; el 55% del Alto Paraná; el 32% de Caaguazú y el 24% de Amambay, también los principales productores de soja del país. En Luis Galeano, *Extranjerización reciente y actual del territorio paraguayo*. BASE-IS. Disponible en: <http://www.basei-s.org.py/wp-content/uploads/2018/05/extranjerizacion2017.pdf>.

105 OXFAM, *ibid.*, 2017, p.28.

106 Marielle Palau (coord). *op.cit.*, 2018, p. 16.

táreas, ocupando alrededor del 60% del territorio. También es la región con la mayor concentración de tierras, con un índice GINI aún superior al nacional, de 0,94, mientras que el precio de la tierra ha subido 4.000% en la última década en el Chaco paraguayo.<sup>107 108</sup>

Entre las cosechas 2013-2014 y 2016-2017, hubo un incremento del 16% en el cultivo de soja en el departamento de Boquerón en el Chaco, con la proyección de incorporar 500 mil hectáreas para la siembra de soja transgénica hasta el 2030 en la región.<sup>109 110</sup> Sólo entre 2010 y 2014, se deforestaron alrededor de un millón 300 mil hectáreas en el Chaco paraguayo, con un promedio de 260 hectáreas al año, estando entre las tasas de deforestación más altas del mundo (Guyra Paraguay).<sup>111</sup> El avance se produjo sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, región de los pueblos tradicionales Ayoreo, Avá y Mbyá Guaraní en el Chaco.<sup>112</sup>



107 PNUD (2010) basado en datos del Censo Agropecuario Nacional de 1991 y 2008.

108 Alberto Yanosky, director ejecutivo de la organización ambiental Guyra: <https://reporterbrasil.org.br/2018/07/a-industria-brasileira-da-carne-avanca-sobre-o-chaco-paraguaio/>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

109 “La soja nutre la industrialización de exportaciones paraguayas”, *Noticias IPS*, 1 de abril de 2016. Disponible en: <http://bit.ly/2g2zWlc>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

110 Marielle Palau (coord), *op. cit.*, 2018, p.16.

111 Informe sobre la deforestación en el Gran Chaco sudamericano, que incluye Argentina, Paraguay y Bolivia para 2018. Ver: <http://guyra.org.py/informe-deforestacion/>. La Ley de Deforestación Cero (Ley 3468/08 y Decreto 3929) no se aplica en la región occidental y se puede deforestar legalmente en el Chaco, siempre que se mantenga un 25% de cobertura forestal y una barrera forestal de 100 metros cada 100 hectáreas.

112 Se encontró un grupo de 35 indígenas produciendo carbón vegetal en condiciones inhumanas en una estancia ganadera del departamento de Boquerón, en Chaco Paraguayo. En un ambiente donde la temperatura alcanza los 50 grados, los trabajadores ni siquiera tenían acceso al agua para beber. In Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, “Situación de los pueblos indígenas en Paraguay”. Ver: <http://infoindigena.servindi.org/10-publicaciones/publicaciones-destacadas/550-informe-sobre-la-situacion-de-los-pueblos-indigenas-en-paraguay.html>. Ver también: <https://reporterbrasil.org.br/2018/07/a-industria-brasileira-da-carne-avanca-sobre-o-chaco-paraguaio/>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

**(pagina anterior) Construcción de una nueva pista de aterrizaje pavimentada en el aeródromo de Infante Ri-  
varola, cuenta con acceso desde la Ruta Transchaco. Foto: MOPC - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de  
Paraguay (MOPC)**

Si bien la infraestructura en la región aún es incipiente, existen proyectos para hacer del Chaco Paraguayo un *nodo [hub]* de transporte internacional, con el fin de triplicar a unos 5 mil millones de dólares el valor anual de las mercancías agrícolas transportados por la carretera Transchaco (Ruta número 9), principal ruta de salida de la producción de la región hacia los terminales portuarios en la Hidrovía Paraguay-Paraná, en las cercanías de la capital Asunción.<sup>113</sup> La Hidrovía Paraguay-Paraná es la principal ruta de salida para la exportación de soja y derivados en el país, donde se ubican 44 puertos y terminales privados, controlados por las principales *tradings* del mundo, como Cargill, Bunge, Louis Dreyfus y ADM y Noble, actualmente propiedad de COFCO.<sup>114</sup> Una de las terminales privadas más expresivas es el Complejo Industrial Angostura SA (CAIASA), controlado por Bunge y Louis Dreyfus.<sup>115</sup>

**Digitalización y regularización de las tierras “mal habidas”.** Incentivos estatales constantes vienen financiando un precio atractivo para las tierras en el Chaco, ya sea a través de políticas de crédito o facilitando la regularización subsidiada de las invasiones ilegales de tierras públicas. La Comisión Paraguaya de Verdad y Justicia (CVJ) señaló que entre 1954 y 2003 se otorgaron ilegalmente en el país 7 millones 800 mil hectáreas de tierras públicas/fiscales o compradas con presupuesto público, las denominadas tierras “mal habidas”, siendo el 80% de ellas en la región del Chaco.<sup>116</sup> En promedio, se asignaron 4 mil 600 hectáreas por persona, principalmente a políticos, élites locales y militares.<sup>117</sup>

---

113 La Carretera fue financiada por el Comité Central de los Menonitas de los Estados Unidos. Ver: <https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/07/22/paraguai-quer-transformar-regiao-do-chaco-em-hub-de-transporte.htm>. Las cooperativas menonitas poseen alrededor de 2 millones de hectáreas en el Chaco y junto con los uruguayos y brasileños dominan el sector lácteo y cárnico. Asociación de Colonias Menonitas del Paraguay (ACOMEPA). Disponible en: <http://acomepa.com/>.

114 Cargill es responsable del 20% de la soja, trigo y maíz (<https://www.cargill.com.py/es/sobre-cargill>). Bunge también cuenta con industria de fertilizantes y puerto en San Juan del Paraná, en Itapúa, y transporte fluvial en General Santos y Corcondia (<https://www.bungeparaguay.com/?q=centros-de-almacenamiento>). ADM adquirió más de 600 mil hectáreas en el departamento de Guairá, y también tiene un puerto privado y tres más en arrendamiento (<https://www.adm.com/adm-worldwide/paraguay>). Para más información sobre los grupos transnacionales y nacionales que operan en Paraguay, ver: OXFAM. Yvy Jára, *Los dueños de la tierra en Paraguay*. 2017.

115 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto al Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el desarrollo internacional ha invertido 200 millones de dólares en el Complejo Industrial Angostura SA (CAIASA).

116 Entre las irregularidades, la adjudicación a personas que no cumplan con los requisitos de beneficiarios de la reforma agraria, o la titulación de más de un lote por beneficiario, con colonias agrarias de soja enteras con titulación irregular.

117 Entre 1954 y 1989, durante el régimen del dictador Alfredo Stroessner, se asignaron ilegalmente tierras de la reforma agraria, sobre todo por políticos y militares. Entre los beneficiarios, el grupo Carlos Casado S/A fue el más emblemático, acumulando un total de 6 millones de hectáreas en la región. En Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay (2008), *Informe Final: Tierras Mal Habidas*. Volumen IV. Disponible

En 2014 se implementó el **Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT)**, con el apoyo de la ONU/PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), para identificar la situación geográfica y registral de las tierras fiscales concedidas por el estado y actualizar la situación de las 1011 colonias campesinas de la región oriental por el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), con el fin de iniciar los trámites de reversión de las tierras “mal habidas”, según el art. 47 del Estatuto Agrario. Si bien el Indert debiera verificar el origen del título, el tipo de ocupación y si se cumplen los criterios de los beneficiarios para validar el registro junto al catastro georreferenciado y digitalizado con el plan de la colonia y de cada lote, el Instituto pasó a considerar los títulos ya pagados, incluso irregulares, como legítimos, con la mera inscripción en el SIRT.<sup>118</sup>

De esta forma, la precisión de los límites de las áreas a partir de la georreferenciación (GPS) acaba sustituyendo los demás criterios, constituyendo un nuevo estándar de seguridad jurídica. Sin la verificación de la función social y económica, la naturaleza de la posesión y la validez del título, el catastro termina encubriendo y legitimando posesiones ilegales y títulos podridos en las colonias, en un verdadero acaparamiento digital de tierras públicas y de pueblos indígenas y campesinos.<sup>119</sup>

*“Bajo el manto de la modernidad, se oculta mejor el histórico despojo”.*<sup>120</sup>

La tierra, ahora titulada y reconocida, obtenidas “legalmente” por el maquillaje digital, está en condiciones de respaldar la emisión de nuevos títulos financieros sobre activos rurales como la tierra y los servicios ambientales (incluidos los bosques plantados), a fin de proporcionar liquidez al mercado mobiliario de valores, así como apalancar el financiamiento de la producción y la in-

---

en: <http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/>

[Informe Comision Verdad y Justicia Paraguay Conclusiones y Recomendaciones.htm](http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/). El Informe de la CVJ sería entregado al Presidente Lugo, depuesto en agosto de 2008; la Procuraduría General de la República y el Ministerio deberían iniciar los trámites para la recuperación de las tierras “mal habidas”. Sin embargo, hasta hoy, no se ha cancelado ningún título ilegal y no se recuperó ninguna propiedad, ni tampoco se juzgó a los responsables políticos e institucionales.

118 De una muestra de 102 títulos analizados por INDERT en el departamento de Caaguazú, 25 eran irregulares, con anomalías graves, como documentos sin firma hasta registros realizados tras la restricción, en 2007, de la cesión de tierras públicas a extranjeros. La titulación de los lotes lanza los asentamientos de reforma agraria en el mercado privado de tierras en un proceso creciente de reconcentración y contrarreforma agraria. Ver: <https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoparaguai/2018/08/28/segunda-geracao-de-colonos-brasileiros-protagoniza-maior-conflito-da-era-cartes/>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

119 Se encuentra en discusión en el país el Proyecto de Ley de registro único de tierras con el fin de crear el Sistema Nacional de Catastro y Registros Públicos (Sinacare), presentado por el sector rural sin ningún debate con la sociedad y que, como en Brasil, tiene como objetivo facilitar la regularización de las tierras públicas como propiedad privada.. BASE-IS, agosto de 2020. Ver: <https://www.baseis.org.py/ley-de-registro-unico-de-tierras-las-trampas-del-mercado/>.

120 Inés Franceschelli. “Bajo el manto de la modernidad, se oculta mejor el histórico despojo”. BASE-IS. Ver: <http://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2016/04/Bajo-el-manto-de-la-modernidad-.pdf>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.



fraestructura de la cadena de valor del agronegocio.<sup>121122</sup> Paraguay Agricultural Corporation (PAYCO), por ejemplo, es el resultado de inversiones del Banco Alemán de Inversiones (DEG) con RíoForte, brazo financiero del grupo portugués Espiritu Santo, y ahora tiene la propiedad directa de 136 mil hectáreas de tierras en todo el país, así como alrededor de 11 mil hectáreas a través de contratos de arrendamiento.<sup>123</sup>

## **BOLIVIA-CHIKUITANIA (SANTA CRUZ Y BENI)**

A finales de 2018, el 83% de la superficie de Bolivia estuvo saneada con más de un millón 300 mil títulos otorgados (INRA, 2018).<sup>124 125</sup> De los 106 millones de hectáreas susceptibles de saneamiento, 12 millones 400 mil se titularon en los primeros diez años (1996-2006), mientras que casi la misma cantidad, 11 millones 700 mil hectáreas, se titularon en sólo tres años del Gobierno de Evo Morales (2007-2009). Según datos del INRA, del área titulada: el 28% son de Territorios Indígenas (TCO-Tierras Comunitarias de Origen); 27%, propiedad comunitaria de campesinos y comunidades interculturales; 14%, propiedades medianas y empresas agrícolas, y 31% son tierras fiscales públicas.<sup>126</sup>

Aunque las cifras brutas apuntan a una mayor extensión de tierras destinadas a los pueblos indígenas y/o titulaciones colectivas y comunitarias, de los 26 millones de hectáreas reivindicadas sólo en las tierras bajas, apenas 12 millones 500 mil hectáreas han sido saneadas y tituladas, mientras el 65% de la tierra sigue siendo controlada por el 1% de las mayores explotaciones agrícolas.<sup>127</sup>

121 El Estado paraguayo apuesta por el controvertido mecanismo de mercado de los llamados servicios ambientales, reglamentando el mecanismo REDD+ para financiar la protección de sus bosques (Ley 3001/2006). Se modificó el Estatuto de la tierra para considerar las áreas plantadas de bosques para la captura de carbono o servicios ambientales como áreas de uso eficiente y racional, siendo excluidas del concepto de latifundio y de *tierra no productiva*, según la función social de la tierra, legitimando el acervo y la financiarización de la tierra a través del fundamento ambiental.

122 Paraguay Agricultural Corporation (PAYCO), por ejemplo, es el resultado de inversiones del Banco Alemán de Inversiones (DEG) con RíoForte, el brazo financiero del grupo portugués Espiritu Santo, y ahora tiene la propiedad directa de 136 mil hectáreas de tierras en todo el país, así como alrededor de 11 mil hectáreas por medio de contratos de arrendamiento. Ver: [http://payco.com.py/#/es/presencia\\_en\\_paraguay](http://payco.com.py/#/es/presencia_en_paraguay)

123 Este es uno de los principales instrumentos en Paraguay que permite inversiones extranjeras en el país. Las tierras del consorcio financiero de la DEG/PAYCO están en todo el país con pecuaria y monocultivos de soja, maíz, trigo y algodón, así como plantaciones forestales y reservas naturales, siendo 12 mil 432 hectáreas de estancia de ganado en Carandayty, Alto Paraguay, y 9 mil 342 hectáreas en Timboty, Presidente Hayes, en la región del Chaco. Ver: [http://payco.com.py/#/es/presencia\\_en\\_paraguay](http://payco.com.py/#/es/presencia_en_paraguay).

124 Procedimiento para la identificación y recuperación de las tierras fiscales públicas; la verificación del origen de los títulos de propiedad (defectos/fraude); la ocupación mansa y pacífica de las posesiones hasta 1996 y el cumplimiento de la función social y económica de la propiedad.

125 Quedando un 10% en proceso de titulación y un 7% de áreas en conflicto. In Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

126 Aunque el proceso de saneamiento siguió un estándar general de reforma agraria asistida por el mercado con base en titulaciones individuales de tierras públicas y con bajo índice de desconcentración de la propiedad de la tierra, la fuerte organización indígena en Bolivia ha logrado en estos años importante titulación colectiva de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), en contraposición a la política de titulación individual masiva del Banco Mundial y constituyendo una excepción en el proceso latinoamericano. Las TCOs se han convertido en la categoría con mayor amplitud de área, aunque en tierras con bajo potencial agrícola y en los márgenes de la infraestructura y las rutas logísticas de transporte.

127 Oxfam, "Desterrados: Tierra, poder e desigualdad en América Latina", 2016, p. 25. Ver: <https://www.cpal-social.org/documentos/320.pdf>.

El incremento en el valor de las mercancías agrícolas, en especial después de 2008, condujo a una aceleración en cómo se incorporó la Chiquitania (Departamentos de Santa Cruz de la Sierra y Beni) al modelo agroextractivo y la lógica de las cadenas globales de valor, transformada en una zona económica compuesta por extensos monocultivos, principalmente de soja transgénica, e infraestructura logística para la exportación, limitando la titulación colectiva de las mejores tierras cultivables de las tierras bajas.<sup>128</sup>

En el periodo 2010-2014, se tituló una media de 3763 hectáreas por título a favor de las empresas agropecuarias, en la llamada *zona estratégica de expansión de la Chiquitania*, representando el 66% del área cultivada del país, el 70% en Santa Cruz.<sup>129</sup> El proceso de saneamiento de tierras en esta región significó la privatización de las mejores tierras cultivables a favor de empresas agropecuarias, consolidando la propiedad sobre áreas de 5 mil y 6 mil hectáreas, prohibidas por la constitución boliviana (Fundación Tierra).<sup>130</sup>

Aunque empresas transnacionales como ADM, Cargill, Bunge y actores financieros como el grupo de inversión venezolano Gravelin invierten directamente en la verticalización de las etapas posteriores de la cadena productiva, sobre todo las vinculadas a la cadena de soja transgénica y la ganadería para la exportación, se estima que controlan directa o indirectamente (agricultura de contrato) cerca de 60% de las tierras más productivas de Santa Cruz de la Sierra.<sup>131 132 133</sup>

Cargill, una de las principales *comercializadoras* presentes en territorio boliviano a través de una *empresa conjunta* con la Central Aguirre Portuaria SA (CAPSA), controla 51% del capital del principal puerto de exportación de soja del país, Porto Aguirre, en la provincia de Puerto Quijarro, ubicado a orillas de la Hidrovía Paraguay-Paraná, principal vía de salida de la producción agrícola del país. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA-COSIPLAN) merece ser destacada en la cadena logística de la zona estratégica de expansión boliviana, con la pavimentación de la carretera que une Pailón (Chiquitos) con Puerto Suárez, a orillas de la Hidrovía, y la construcción en curso del Corredor Bioceánico que conecta el Océano Atlántico (Puerto de Santos) con el Océano Pacífico (los puertos de Iquique y Antofagasta, ambos en Chile).

---

128 Representó un 35% de la superficie del país en 2018, según el ISAA. Ver: <http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/54/executivesummary/default.asp>

129 Gonzalo Colque, Efraín Tinta y Esteban Sanjinés, “Segunda Reforma Agraria: una historia que incomoda”. Fundación Tierra, 2016, p. 191. Ver: <http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/151-segunda-reforma-agraria-una-historia-que-incomoda> e INE. Censo Agropecuario 2013, La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadística, 2015. <http://censosbolivia.ine.gob.bo/censofichacna/>.

130 Ver: <http://www.ftierra.org/index.php/tema/tierra-territorio/934-denuncian-descarada-privatizacion-de-tierras-fiscales-en-favor-del-agro-cruceno>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

131 Ver: [http://www.ftierra.org/index.php?option=com\\_mtree&task=att\\_download&link\\_id=169&cf\\_id=52](http://www.ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=169&cf_id=52). Consultado el 11 de septiembre de 2020.

132 En la agricultura de contrato, tanto la tierra como la mano de obra se subordinan a la cadena global de mercancías agrícolas mediante la realización de contratos de producción con grandes comerciantes del sector. Además, el contrato también vincula a la adquisición de determinados insumos, generalmente importados, con aplicación de propiedad intelectual, como fertilizantes, agrotóxicos y semillas convencionales y transgénicas. Los agrotóxicos y semillas en general son la parte más relevante de los costos operativos, pudiendo alcanzar el 60% de los costos en Bolivia.

133 Ver: <http://www.farmlandgrab.org/28372>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

La transformación de la Chiquitania en una zona de expansión e inversiones en agronegocios implica la ampliación de 250 mil hectáreas adicionales de la frontera agrícola en la región, lo que ha llevado, desde 2013, a la modificación de varias leyes para condonar la deforestación ilegal y autorizar nuevas en Santa Cruz y Beni.<sup>134</sup> Entre 1990 y 2016 hubo una deforestación acumulada de 5 millones 100 mil hectáreas, mientras que sólo en 2019 se destruyeron más de 5 millones 300 mil hectáreas, de los cuales 4 millones 700 mil estaban en Santa Cruz y Beni.<sup>135</sup>

**Cercamiento de las tierras cultivables por medio del catastro digital.** En el proceso de saneamiento de las tierras en Bolivia, se identificaron *zonas prioritarias* durante la preparación del Proyecto Nacional de Administración de Tierras financiado por el Banco Mundial (1992-1995) y en relación a otro proyecto del Banco, el “Proyecto de Tierras Bajas del Este”, para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad sobre las tierras con mejor potencial agrícola del país en la construcción de un espacio económico para la producción comercial de soja para exportación.<sup>136 137</sup>

Estas áreas prioritarias estaban compuestas por áreas en conflicto en cuanto a la posesión y propiedad, las cuales deberían realizar el Saneamiento Integrado al Catastro (CAT-SAN), modalidad de saneamiento que combina la inscripción del inmueble en registros públicos con la inscripción en un catastro legal con informaciones georreferenciadas de la propiedad, que pasaba a conferir prioridad sobre los derechos de propiedad en caso de superposición de títulos sobre la misma área.<sup>138</sup> De las 2 millones y medio de hectáreas identificadas como zonas prioritarias, 1 millón 800 mil hectáreas estaban en Santa Cruz de la Sierra, según la empresa INYPSA, contratada por el Banco Mundial<sup>139</sup>.

---

134 Las Leyes 337/2013, 502/2015 y 739/2017 condonaron las deforestaciones ocurridas entre el 12 de julio de 1996 y diciembre de 2011; la Ley 741 de 29 de septiembre de 2015 autoriza la deforestación de hasta 20 hectáreas por unidad familiar para pequeñas propiedades y propiedades colectivas-comunitarias, TCOs y asentamientos. El Decreto 26075/2019 y el Decreto 3973/2019 permitieron la deforestación y la práctica de la quema en tierras privadas en los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y Beni.

135 “Fuego en Santa Cruz: Balance de los incendios forestales de 2019 y su relación con la tenencia de la tierra”. Fundación Tierra, octubre 2019. Ver: <http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/194>. Ver también: <https://es.mongabay.com/2020/01/bolivia-deudas-ambientales-incendios-2019/>. Consultado el 11 de septiembre de 2020.

136 La Cooperación técnica y financiera del Banco Mundial para la preparación del Proyecto Nacional de Administración de Tierras (PNAT), entre 1992 y 1995, contó especialmente con la creación y funcionamiento de la INRA y la ejecución del CAT-SAN para consolidar cerca de 3 millones de hectáreas con créditos sucesivos de 24,7 millones y 7 millones y medio de dólares. In Colque et al. 2016, p. 141-150.

137 Financiamiento de 50 millones de dólares del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para expandir la producción de soja en Santa Cruz de la Sierra, lo que incluyó la construcción de infraestructura productiva y de transporte, así como mecanismos de crédito rural y planes de ordenamiento territorial. En Enrique C. Balliván, “Empresas transnacionales en el agronegocio sojero”. *Fundación Tierra*, 2017, p. 18-19. Ver: [http://www.ftierra.org/index.php?option=com\\_mtree&task=att\\_download&link\\_id=169&cf\\_id=52](http://www.ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=169&cf_id=52)

138 Esta modalidad sería requerida para áreas con: i) irregularidades técnicas y/o jurídicas en trámites agrarios; ii) conflictos por derechos de propiedad; iii) indicio de incumplimiento de la Función Económico-Social de la tierra; iv) bajo posesión de tierras sin título; y v) ejecución de proyectos de interés público. In Colque et al. 2016, p 149-150.

139 Empresa española especializada en gestión de planificación y servicios de geoinformación y georreferenciación. Realizó digitalización para la adjudicación de 2 millones de hectáreas a través del CAT-SAN

La iniciativa contó con unos 70 millones de dólares de la cooperación internacional y créditos externos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Nórdico de Desarrollo, la USAID (Agencia del Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) entre otros.<sup>140</sup> El financiamiento sirvió, en todo caso, a las empresas extranjeras que fueron uno de los principales ejecutores del programa de saneamiento, ya que cuentan con experiencia tecnológica para implementar la nueva estructura de digitalización de la gobernanza agraria mediante el uso de una base de datos para el catastro rural, con georreferenciación (GPS) y medición de parcelas por imágenes de satélites.<sup>141</sup>

---

en Santa Cruz y La Paz. In *ibid*, 2016, p.147.

140 *Ibid*, p. 144, ver en: INRA, “Estado del Proceso de Saneamiento a 10 años de vigencia de la Ley 1715”, de 2006.

141 *Ibid*, p. 145.





El resultado observado en la ejecución de este programa fue un aumento de las titulaciones a las grandes propiedades, como el caso de Santa Cruz de la Sierra, que hoy tiene 5 millones 600 mil hectáreas tituladas como propiedades medianas o empresas agropecuarias, sobre todo en el periodo 2012-2018; 3 millones de hectáreas como pequeñas propiedades; 5 millones 300 mil hectáreas como Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y 1 millón 400 mil hectáreas como propiedad comunitaria.

La inscripción de zonas prioritarias sobre áreas cultivables en el Saneamiento Integrado al Catastro (CAT-SAN) terminó excluyendo la mayor parte de las tierras con potencial para cultivo y ganadería del proceso redistributivo de reforma agraria en Bolivia. Sobre todo por el enfoque presupuestario y tecnológico en la inscripción en el catastro, que dejó de lado el desarrollo de procedimientos para verificar la función social y ambiental de la propiedad.

La titulación individual de la propiedad fue esencial para insertar las tierras cultivables en el mercado de tierras, ya que las TOCs y la propiedad comunitaria son áreas fuera del comercio, que no se pueden vender o dar en garantía. Así se permitió el acceso a las tierras por parte de empresas extranjeras. Dado que la venta o cesión de tierras públicas a extranjeros está prohibida en Bolivia, el programa de digitalización y titulación privada individual de las tierras fiscales (ya sean pequeñas, medianas o grandes) fue el primer paso para hacer posible la entrega, ya sea a través de la venta o contrato, de las tierras al capital extranjero, y, por lo tanto, para constituir la zona especial de inversión agroindustrial sobre la Chiquitania.

*Traducción: Maria Teresa Mhereb*